

La evolución del Narcotráfico en México

Oscar Contreras Velasco

“Al amparo de la amapola crecieron pueblos, se dilataron fortunas. Podía sentirse en las miradas desafiantes de los jóvenes el poder de aquella ilegalidad soberana, venida de la historia. Era la fiesta del riesgo, la alegría de haber sido arrojados al mundo para abrirse paso y no dejarse atropellar...”

Héctor Aguilar Camín, “La Conspiración de la Fortuna”

Introducción

Durante las últimas décadas y con el advenimiento de las sociedades globalizadas, el fenómeno del narcotráfico ha cobrado gran importancia como una problemática nacional e internacional. Sin embargo, hasta hace poco tiempo, los Estados no se habían percatado de la seriedad de dicho problema y de las implicaciones que podría tener. Gobiernos como los de Estados Unidos y México, apenas comienzan a darse cuenta de las dimensiones del narcotráfico como un poder que desafía la autoridad del Estado y que afecta el bienestar de la sociedad. Por otro lado, el hecho de que los gobiernos se encuentren librando una “guerra” contra el narcotráfico, no garantiza de ninguna manera su victoria. Para poder atacar de manera efectiva al narcotráfico, primero es necesario comprender sus orígenes, su naturaleza y sus dimensiones. Este ha sido uno de los principales errores por parte de los gobiernos al intentar entender el fenómeno y explica en buena medida su impotencia para controlarlo, a tal grado que muchos expertos del tema ven los esfuerzos del Estado contra el narcotráfico como una guerra perdida.

El narcotráfico se puede definir como el tráfico de drogas ilegales que son transportadas clandestinamente de un lugar a otro. Para Jorge Fernández Menéndez, se debe entender al narcotráfico como una “estructura de poder” porque de esta manera se puede

comprender la magnitud real de dicho fenómeno, "... sus relaciones con otras relaciones con otros fenómenos del crimen organizado, cómo operan sus espacios de influencia política y su relación con procesos desestabilizadores, con decisiones políticas, económicas y sociales...". (Fernández Menéndez, Jorge, 2001: 15)

Esta estructura de poder surge como una amenaza directa al poder del Estado, provocando una confrontación violenta. De acuerdo a Jorge Chabat, sólo existe una confrontación directa entre el narcotráfico y el Estado: cuando "el narco comienza a crecer en un país y desafía al Estado. Sin embargo, la confrontación no es la forma de relación más funcional para el negocio del narcotráfico." (Chabat, Jorge, 2005: 15) Esto es cierto si tomamos en cuenta que el narcotráfico como una empresa ilegal necesita de discreción e incluso el anonimato para poder operar. Para lo cual es necesario, entre otras cosas, la capacidad para comprar al gobierno (o por lo menos a las personas necesarias) para que el narcotraficante pueda operar impunemente, O bien, la incapacidad del Gobierno para detectar los círculos de corrupción que están relacionados con el narcotráfico dentro del Gobierno mismo.

Por otro lado, es necesario subrayar la imposibilidad de que el estado se convierta en un Narcoestado, lo cual implicaría un Estado totalmente corrompido y demasiado débil para afrontar al narcotráfico por lo que éste último terminaría absorbiendo al primero. Esto de acuerdo a Chabat, es imposible: primero porque una de las características del narco es que no persigue fines ideológicos por lo que tampoco persigue fines políticos. Sus fines en realidad son sólo de lucro. Segundo, porque uno de los principales intereses del narco es que exista un Estado lo suficientemente fuerte como para no llamar la atención del público o que se desenmascaren las redes que existen entre ambos, pero también un Estado fuerte es uno que puede brindar protección al

narcotráfico y que puede hacerse de la vista gorda sin que la sociedad se dé cuenta.
(Chabat, Jorge, 2005:14)

Un Estado demasiado corrompido o débil, atraería la atención de la comunidad internacional y de la sociedad. Así mismo un político abiertamente corrupto no funciona porque su poder para maniobrar queda muy limitado. Pero el narcotráfico no sólo es eso. Estamos ante la presencia de un fenómeno que si bien responde a los efectos de las leyes de mercado, también tiene como base a la sociedad y la cultura. Al final de cuentas, el narcotráfico como un fenómeno que representa la ilegalidad y la operatividad fuera de todos los marcos establecidos por la ley, reflejan un sistema internacional débil, limitado e insuficiente para ofrecer la igualdad y las condiciones de “felicidad” que prometían algunos expertos.

El narcotráfico en México se ha convertido en un problema grave, que pone en jaque al gobierno, la seguridad nacional, la seguridad y la salud de la sociedad. Actualmente el gobierno de Calderón está librando una guerra contra el narcotráfico pero es una guerra que parece no tener fin y los costos son cada vez más altos. La sociedad tiene miedo de salir a las calles, de hacerse escuchar, de hacer valer su voto, los jóvenes están cada vez más ensimismados en la experiencia hedonista de las drogas, en una actitud apática ante su propia realidad. La pregunta es ¿Cómo hemos llegado a este punto tan crítico en el que la sociedad y el Estado parecen desmoronarse? ¿Acaso nadie se dio cuenta de a dónde nos dirigíamos? ¿Cuándo comenzó el narcotráfico, qué es, y cómo puede el gobierno atacarlo?

El objetivo principal de este trabajo es mostrar que el narcotráfico es un fenómeno internacional y cómo las políticas antinarcóticos de Estados Unidos y de México, a lo largo de su historia, han sido insuficientes para detener el narcotráfico e incluso han

agravado la situación. Las políticas restrictivas y miopes de Estados Unidos aunadas a la falta de estrategia del gobierno Mexicano han conjugado la ecuación perfecta para brindarle al narcotráfico de todo el poder, dimensión y capacidad de organización que tiene en la actualidad. Más aún, de continuar con las mismas políticas, los gobiernos de México y Estados Unidos estarían demostrando que no tienen la capacidad estratégica ni militar para afrontar al narcotráfico. El resultado hasta ahora ha sido la violencia sin precedentes en México, la creación del mercado de consumo de drogas más grande del mundo en Estados Unidos y otro creciente en México.

El trabajo está dividido en tres partes. En el primer capítulo, se hace un recuento histórico de la evolución del narcotráfico en México, desde el proceso de conformación de un mercado oferente de narcóticos a principios del siglo XX, hasta la consolidación de los principales cárteles de la droga mexicanos en la actualidad. El argumento de este capítulo es que las políticas restrictivas e interdicción de Estados Unidos y la falta de estrategia de México han derivado en la situación actual con respecto al narcotráfico.

En el segundo capítulo, se hablan de las causas externas (Estados Unidos) que han permitido la evolución del narcotráfico en México hasta la actualidad. Las dos causas principales han sido: que la sociedad norteamericana representa el mercado de consumo de drogas más grande del mundo y que el gobierno estadounidense se ha enfocado erróneamente en ver al narcotráfico como un problema de seguridad nacional que proviene de fuera de sus fronteras.

En el tercer capítulo, se tratan las principales causas internas que han permitido la evolución del narcotráfico en México. Por un lado, podemos observar un gobierno históricamente deslegitimado que deriva en un Estado débil e incapaz de mantener el monopolio del poder ante actores sociales como el crimen organizado. Por otro lado

vemos grados de corrupción en las instituciones que hacen imposible una lucha coherente contra el crimen organizado. La falta de preparación de nuestros cuerpos policíacos y ejército para librar esta lucha, los hacen presa fácil ante una estructura criminal altamente móvil, armada, con gran capacidad corruptora y estratégica. Además, los problemas estructurales que han perseguido a la sociedad desde la fundación del Estado como son la pobreza, la falta de oportunidades laborales, falta de educación, entre otros, son los motores del crimen organizado en este país. También se aborda el tema de la cultura del narcotráfico, también llamada “narcocultura” y la necesidad que tiene el gobierno tanto de México como de Estados Unidos de conocerla y tomarla con seriedad si quiere entender porqué el narcotráfico tiene tanta fuerza en las bases sociales. En las conclusiones se agregan algunos argumentos y comentarios finales.

1.- Breve recuento Histórico del narcotráfico en México.

1.1 Las primeras décadas del siglo XX: criminalización del consumo de estupefacientes.

No es fácil determinar el momento histórico en que el narcotráfico se comienza a establecer en la región de América del Norte. Sin embargo, la guerra contra el narcotráfico tiene sus orígenes en algunos preceptos morales y políticos de Estados Unidos. Durante finales del siglo XIX y principios del XX, existían ciertos sentimientos nacionalistas dentro de Estados Unidos que comienzan a vincular conductas patológicas con algunas minorías étnicas. Esto propició un sistema legal que prohibiera ciertas sustancias (Lindau, 2000: 250). En realidad la mayoría de los consumidores eran anglosajones (White Anglo Saxon Protestant), sin embargo, los estereotipos atribuían el uso de marihuana a los mexicanos, el de cocaína a los negros y el de opiáceos a los chinos. Además se extendió una tendencia hacia la criminalización de estas conductas. (Lindau, 2000: 250) También hay que tomar en cuenta la fuerte tradición puritana de los primeros pobladores de Estados Unidos, los cuales tendían a condenar cualquier sustancia o producto que alterase el comportamiento.

Por este motivo, Estados Unidos comenzó un gran activismo contra el uso de drogas: en 1906 se firmó la Convención sobre el Opio, en 1909 delegados de trece países se reunieron en Shanghai para llevar a cabo la primer conferencia internacional contra el opio con la finalidad de eliminar el comercio, manufactura y uso de drogas. (Celia Toro, María, 1995:5). La mayoría de las iniciativas propuestas por Estados Unidos en foros multilaterales eran en realidad esfuerzos por extender su propia política antidrogas en el exterior. En 1914 el Congreso estadounidense aprobó la ley Harrison y otras posteriores que prohibían ciertos estupefacientes como los opiáceos, la cocaína y la marihuana. En 1930 se estableció el Federal Bureau of Narcotics (FBN, Oficina Federal de

Narcóticos). Curiosamente, este sistema funcionó de manera eficiente en gran parte porque hasta entonces no existía un consumo generalizado de drogas. Por su parte, México comenzó sus esfuerzos para combatir el consumo, la producción y el tráfico de estupefacientes desde la Conferencia de Shangai en 1909 y la Convención Internacional del Opio de la Haya en 1911 y 1912. Como signatario, México se comprometió a imponer controles sobre el cultivo ilícito de opio en su territorio, con el fin de evitar su exportación clandestina. Para 1931, México había prohibido las exportaciones de marihuana y heroína. (Craig, 1989: 261) Durante toda esta etapa, Estados Unidos no estaba interesado en la cooperación internacional como medio efectivo para combatir el narcotráfico. Su aproximación era más bien imponer a los demás países sus propios intereses y reglas sobre cómo atacar el problema. (Toro, 1995:6). Por otro lado, aunque América Latina era una región que veía crecer el fenómeno dentro de su propio territorio, en los foros internacionales sólo México consideraba crucial la supresión del tráfico de drogas e incluso tomó iniciativas para restringir las actividades relacionadas a este fenómeno dentro de su país.

Todos estos esfuerzos por parte de Estados Unidos para combatir el narcotráfico produjeron irónicamente una situación bien conocida. Las diferentes restricciones en la producción y comercio de drogas y la adopción de la Enmienda Dieciocho a la Constitución de los Estados Unidos en 1919 (La Ley Volstead, que prohibía la venta de bebidas alcohólicas), tuvo un impacto inmediato sobre los mercados en los territorios contiguos. En el caso de México, esto significó un incentivo para los exportadores de drogas y alcohol quienes tomaron ventaja de los elevados precios que resultaron de la creación de mercados clandestinos. (Toro, 1995:7) Debido a las políticas prohibicionistas de Estados Unidos, lo que a principios del siglo XX representaban

exportaciones legales con valor mínimo, se convirtió en un problema serio de tráfico y en la creación de un mercado clandestino.

Por su parte, el gobierno mexicano en la época de la revolución veía el tráfico de drogas como un factor más que podía desestabilizar la frontera entre México y Estados Unidos y a un país que se encontraba en guerra. El presidente de México, Venustiano Carranza estaba igualmente preocupado por esta situación e intentó prohibir el tráfico de opio en Baja California. Dicha propuesta fue ignorada por el entonces gobernador del estado quien estaba vinculado con el tráfico de esa droga. (Toro, 1995:8). En estos años, la integridad política de México estaba claramente en jaque. Los líderes revolucionarios no tenían el control de los estados de Sonora y Baja California, mientras que otros estados del norte no estaban contentos con el nuevo gobierno. Esteban Cantú, gobernador y cacique de Baja California quien gobernó de 1914 a 1920, dictaba su propia ley y su propio sistema recaudación de impuestos y se negaba a utilizar dinero mexicano. Incluso declaró neutral al estado de Baja California durante la ocupación de Veracruz por el ejército de Estados Unidos en 1914 y nuevamente durante la expedición del general Pershing en el estado de Chihuahua. (Toro, 1995,9). Buena parte del dinero de Cantú provenía de actividades ilegales como la prostitución, extorción, apuestas, y narcotráfico, actividades apoyadas por los ciudadanos estadounidenses. El gobierno mexicano estaba particularmente preocupado por la posibilidad de que los contrabandistas de drogas pudiesen también contrabandear armas que pudiesen ser vendidas a cualquier fuerza opositora del gobierno. En 1923 el presidente Alvaro Obregón prohibió la importación de cualquier narcótico y creó una base aérea en Ciudad Juárez para detener el contrabando de licor a lo largo de la frontera con Estados Unidos. En 1927 el presidente Calles firmó un decreto prohibiendo la exportación de heroína y marihuana (Toro, 1995, 8). La cooperación entre México y Estados Unidos

durante estos años fue sumamente pobre. Mientras que al país del norte le preocupaba el ingreso a su territorio de drogas y alcohol de manera ilegal, México tenía problemas evitando el contrabando ilegal de armas.

En estos años, se hizo muy poco para detener la producción de marihuana y opio. México intentó firmar acuerdos bilaterales para luchar de manera más coordinada contra el narcotráfico, pero Estados Unidos no parecía estar interesado. Para el gobierno era sumamente difícil luchar contra una corporación con tanto dinero y capacidad corruptora como era el narcotráfico. Las consecuencias más notables y obvias de la política antidrogas nacional fue la colusión y violencia desatada en territorio mexicano y, sin embargo, en opinión de los Estados Unidos, el papel de México en la lucha contra las drogas era excepcional y era el camino correcto para desarticular al narcotráfico. (Toro, 1995: 11).

1.2 Segunda Guerra Mundial: cambio de política de Estados Unidos hacia las drogas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la industria estadounidense se encontraba en un esfuerzo monumental para satisfacer las demandas de su ejército. Esta economía de guerra no le permitía proveer de muchos otros productos al país, y debía importarlos. Uno de estos era la morfina y diversos opiáceos para sus soldados. México se convirtió en su principal proveedor. (Inciardi, 1992: 41) Sin embargo, los factores que realmente contribuyeron al crecimiento de la producción de heroína y marihuana en México después de la guerra fueron la desarticulación de las rutas tradicionales de heroína (rutas que provenían de Europa y Asia) y el incremento del consumo en Estados Unidos de estas drogas. A pesar de esto, las mafias italianas en Estados Unidos lograron reorganizarse y recuperar el control del mercado de heroína importándola desde Italia y

posteriormente, utilizando la droga que provenía desde Turquía y que era procesada en Marseilla. Por estos motivos, la heroína mexicana emergió hasta finales de la década de los 60 y principios de los 70, aunque ya era el principal proveedor de mariguana hacia los Estados Unidos desde la segunda guerra mundial. (Toro, 1995: 11)

1.3 Posguerra: vuelta al prohibicionismo.

Cuando la guerra terminó, el gobierno estadounidense decretó que la producción e importación de estupefacientes hacia Estados Unidos estaban prohibidos. Si bien México formó parte de tratados para internacionales para controlar las drogas, y prohibió el uso de mariguana y similares, el consumo de drogas era tan pequeño en aquel entonces y como no había mucho interés por respetar los tratados en este tema, el tema de las drogas fue muy secundario durante la primera mitad del siglo XX. (Lindau, 2000: 250) México, desde principios de siglo ya había mostrado esfuerzos por combatir la producción de estupefacientes, cuando inmigrantes chinos se establecieron en Sinaloa y Sonora y se convirtieron en los primeros productores de opio en el país. (Craig, 1989: 251) En 1948 se llevo a cabo en México la primera campaña de erradicación de cultivos de opiáceos. El ejército recorrió alrededor de 11,000 kilómetros, destruyendo casi 700 sembradíos a nivel nacional. (Toro, 1995: 13). La novedad de esta campaña fue que se extendió hacia otros estados además de aquellos productores por tradición: Sinaloa, Durango y Chihuahua, región que se llegó a conocer como el triángulo crítico o triangulo dorado.

No fue sino hasta la década de los 60 y 70, cuando el consumo se extendió realmente en los Estados Unidos. El principal mercado se encontraba en los jóvenes universitarios. El movimiento “hippie”, promotor de la paz, era también un movimiento que perseguía el

hedonismo y la búsqueda de experiencias nuevas. Para 1967 alrededor del 13 por ciento de los adultos entre 18 y 25 años en Estados Unidos había probado la marihuana y el consumo de heroína había aumentado considerablemente (Toro, 1995, 15) Sin embargo, hubo otros factores clave que permitieron el ascenso de México como el principal productor de drogas a nivel mundial. Por un lado, la llamada “Conexión Francesa”¹ fue desarticulada en parte por los programas del gobierno de erradicación de cultivos y tráfico de opiáceos. Pocos años después, la famosa “Ruta del Caribe”, que era el trayecto que seguían los cargamentos de droga desde Colombia y otras partes de Sudamérica hacia los Estados Unidos fue altamente militarizada por Estados Unidos por lo que era cada vez más difícil traficar droga con bajos riesgos. Estos factores permitieron que las únicas rutas disponibles para introducir la droga hacia los Estados Unidos fuesen las rutas mexicanas controladas por narcotraficantes de ese mismo país. En unos cuantos años, México ya representaba una competencia importante para las mafias colombianas. “En los años 1975-1976, México surte 75% de la marihuana y 60% de la heroína consumidas en Estados Unidos.” (Francois Boyer, Jean, 2001:70)

En septiembre de 1969, el gobierno de Richard Nixon, preocupado por los altos índices de consumo de droga dentro de su país y como llamado de atención ante la insuficiencia de México para controlar el tráfico de drogas, decidió montar la Operación Intercepción. Duró apenas tres semanas en las que poco más de dos mil agentes del gobierno estadounidense inspeccionaron minuciosamente todos los vehículos provenientes de México. El objetivo final de esta operación era en realidad generar presión internacional hacia México, y lo lograron.

¹ The french connection era el nombre dado a la ruta de heroína que comenzaba en Turquía con la producción de opiáceos y que era manufacturada en Marsella con destino final en los Estados Unidos.

México respondió pocos años después con la Operación Cóndor. Washington ayudó a México a montar la operación Cóndor, con el fin de erradicar los cultivos de droga en territorio Mexicano. La producción de drogas para esos años había crecido de una manera alarmante. Las autoridades mexicanas se dieron cuenta de que necesitaban tomar medidas distintas. Métodos de erradicación anteriores sólo habían logrado una mayor proliferación de traficantes y campesinos armados. Algunas organizaciones relacionadas al narcotráfico habían ganado un poder considerable en ciertos estados del norte del país. (Toro, 1995: 17). Más aún, el narcotráfico comenzaba a presentar una amenaza real al poder del estado y su capacidad para mantener el orden e imponer la ley. México estaba preocupado de que el fracaso de sus políticas antidrogas pudiese poner en jaque la autonomía de futuras políticas ante Estados Unidos. Se montó entonces la operación de erradicación de cultivos de droga más ambicioso en la historia del país. Miles de hectáreas de cultivos de marihuana y amapola fueron quemadas. Esto redujo la participación de México en el mercado Estadounidense del 70 al 10 por ciento para 1983, sucedió algo muy similar con la heroína. (Craig, 1989, 251) Se gastaron más de 35 millones de dólares en la campaña de erradicación de 1975-1976. El gobierno estadounidense gastó un millón de dólares por cada 4 gastados por el gobierno mexicano. Se implementaron cerca de 5000 soldados y 350 miembros de la PJJ (Toro, 1995:18).

Desgraciadamente la campaña fue exitosa sólo por algunos meses, ya que los cultivos de opiáceos lograron encontrar lugar seguro en otras partes de las múltiples sierras mexicanas. El único logro real de la Operación Cóndor fue forzar a las redes del narco a buscar otras tierras para sus cultivos en lugares más seguros o más inaccesibles. Además, de acuerdo a Celia Toro, una política antinarcóticos más rígida, genera el fenómeno de “cartelización” del mercado ya que sacan a los traficantes menos

dispuestos a asumir un mayor riesgo y por lo tanto se beneficia y fortalece a los más fuertes y organizados. Estos últimos reorganizan sus empresas, utilizando mayor corrupción y violencia. (Toro, 1995: 17) Dicha situación se ha convertido en una constante en la actualidad y las consecuencias han sido terribles para la sociedad mexicana y ha puesto en jaque el monopolio de la fuerza del gobierno y su legitimidad.

El éxito de las nuevas técnicas de cultivo en regiones inaccesibles, aunado a los efectos de la corrupción en todos los niveles del gobierno e instituciones mexicanas, los problemas económicos del país entre otros problemas, redujeron la eficacia de los esfuerzos del mismo gobierno para erradicar cosechas. A tal grado que a mediados de los ochenta, los sembradíos de marihuana eran mayores que antes de la Operación Condor. (Lindau, 2000, 251)

En estos años, las condiciones favorables en las que se encontraban los cárteles mexicanos y su astucia para negociar con los cárteles de Colombia, principalmente el cártel de Cali y de Medellín, les permitió un rápido ascenso económico. (Francois Boyer, Jean, 2001: 60)

La capacidad corruptora del narcotráfico, su infiltración en el gobierno y la capacidad de producción de los cárteles de la droga, se pueden observar con el descubrimiento de el rancho El Búfalo en 1984, en Chihuahua, que empleaba abundante mano de obra en grandes extensiones de tierra suficientes para rebasar las estimaciones de la DEA de la capacidad total de producción de todo el país durante aquellos años. Esta finca pertenecía a Rafael Caro Quintero, famoso narcotraficante que fue detenido tras su involucramiento en el secuestro y ejecución del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar. Otro ejemplo se puede ver una década después, en 1996, cuando The New York Times vinculó con narcotraficantes a varios gobernadores y actores políticos en

México. Entre ellos, Manlio Fabio Beltrones, gobernador de Sonora, Jorge Carrillo Olea, gobernador de Morelos, Raúl Salinas de Gortari y Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo, entre otros. A principios de los años noventa, tribunales de Estados Unidos condenaron por tráfico de drogas a Rubén Zuno Arce, cuñado de Luis Echeverría. En 1997 fue arrestado el general Jesús Gutiérrez Rebollo (jefe de la campaña antidrogas en México), por aceptar sobornos de Amado Carrillo Fuentes, en aquella época el jefe del cártel de Juárez. (Boyer, 2001: 60)

1.4 Décadas 80 y 90: consolidación de los cárteles mexicanos de la droga.

Para la década de los 80s, aunque los cárteles colombianos se encontraban en su auge, se vieron en la necesidad de reorientar sus rutas hacia México. En este punto los nacientes cárteles mexicanos se vieron sumamente beneficiados por sus ventajas comparativas (que eran principalmente geopolíticas). “En cierto modo, la llegada de los mexicanos al gran mercado de la cocaína precipitó el desmantelamiento de la organización de Escobar.” (Boyer, 2001: 70). En 1987 el tráfico de narcóticos fue declarado un problema de seguridad nacional por primera vez por el presidente De la Madrid y luego retomado por el presidente Salinas (Toro, 1995:32). Esta situación sólo se intensificó durante la década de los 90s. Organizaciones como el Cártel de Tijuana, el Cártel de Juárez, el Cártel de Sinaloa, el Cartel del Golfo, entre otras, operaban en la frontera norte del país con una infraestructura multimillonaria. La ventaja comercial de los cárteles mexicanos con respecto a los colombianos es su situación geográfica e histórica. Más de tres mil kilómetros de desierto prácticamente despoblado, es el tamaño de la frontera que une a México y Estados Unidos. Esto, aunado a que en 1993

se firmó el Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCAN)², facilitará cada vez más la entrada de droga de México a Estados Unidos.

El narcotráfico, para las organizaciones colombianas, resulta cada vez menos rentable simplemente porque los mexicanos sacan más dinero que los colombianos por cada kilo de coca. Para fabricar la droga, construir y proteger los laboratorios, transportar la droga hasta México y sobornar a todas las personas necesarias para que esto pueda suceder de manera impune, las mafias colombianas gastan muchos recursos. Por otro lado los cárteles mexicanos venden la droga a Estados Unidos a un precio mucho mayor y, por si fuera poco, los colombianos deben entregar la mitad de su propia mercancía a los mexicanos por transportarla hasta Estados Unidos. Por estos motivos los cárteles mexicanos se enriquecen a un ritmo más rápido. “En 2000, para tener el derecho a utilizar el territorio mexicano, las mafias colombianas deben renunciar a comercializar en Estados Unidos entre 50% y 75% de la droga que ellas exportan” (Boyer, 2001:72).

Durante esos años Estados Unidos resuelve crear una nueva herramienta de política exterior en su estrategia de lucha contra el narcotráfico internacional. El Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca crean el proceso de certificación en 1986 como parte de una ley antidrogas más amplia que responda a las necesidades y preocupaciones de los votantes norteamericanos por la creciente violencia y la adicción que estaban generando algunas drogas como el crack. Dicha ley requiere que el presidente de los Estados Unidos envíe al Congreso una lista de países con producción y tráfico de narcóticos que no han cooperado lo suficiente en los esfuerzos de interdicción contra el narcotráfico. (Roett, 1997: 2) Si un país no recibe la certificación, la ley dice que se le debe imponer la suspensión de fondos de ayuda financiera de Estados Unidos, con la

² Con la entrada en vigor del Tratado de Libre comercio, las barreras al comercio serán cada vez menores, los mecanismos que regulan el comercio disminuirán y por ende, será cada vez más fácil introducir droga hacia los Estados Unidos.

excepción de que el presidente crea necesario cancelar dicha medida por ser de interés para la seguridad nacional. Instituciones gubernamentales como el Banco de Importación y Exportación se ven obligadas a retener créditos, y directores estadounidenses de instituciones internacionales como el Banco de Mundial y el Fondo Monetario Internacional se ven obligados a votar en contra de cualquier préstamo multilateral a dicho país. (Roett, 1997:2)

El proceso de certificación, impulsado por el presidente Reagan, fue un intento del gobierno estadounidense por crear una medida efectiva para combatir a nivel internacional al narcotráfico, sin embargo como probarían las décadas siguientes, en realidad esta medida no sólo no reduciría el narcotráfico sino que causaría tensiones en la relación bilateral entre México y Estados Unidos dificultando la generación de un esquema integral para combatir el problema.

Desde 1997 la ruta del Pacífico se encuentra en manos de mexicanos. Es decir, las rutas de transporte marítimo de droga ya no son controlados por colombianos, sino por mafias mexicanas, ayudados por magnates mexicanos, vinculados a los altos dignatarios del régimen. Un ejemplo de esto es la compañía de Transportación Marítima Mexicana, S.A. de C.V. (TMM) controlada por la familia Hank Rohn, asociada con la organización de Amado Carrillo Fuentes (el señor de los cielos) jefe del cártel de Juárez. (Francois Boyer, Jean, 2001: 78) La DEA tiene informes en donde afirma que actualmente las mafias mexicanas tienen redes de distribución de su mercancía por todo el territorio estadounidense. Es incluso probable que ciertos capos mexicanos operen a su antojo de uno y otro lado de la frontera. (Francois Boyer, Jean, 2001: 81)

En este contexto, se dio la conformación de los cárteles mexicanos más grandes que disputaban las principales rutas de la droga hacia los Estados Unidos. De acuerdo a un reporte preparado por la División Federal de Investigación del Congreso, entre 1999 y 2002, existían 13 organizaciones dedicadas al narcotráfico en México. En este trabajo menciono las más importantes.

Organización Arellano Félix o Cártel de Tijuana: Creado a principios de la década de los 80, en pocos años se convirtió en la red de narcotráfico más poderosa y agresiva en México. En realidad este cártel fue dirigido por muchos años por una docena de líderes, entre los más conocidos están “El Chuy Labra” y “El Mayel” y desde luego “El Mon” (Ramón Arellano Félix) y “El Min” (Benjamín Arellano Félix), (Jean Francios Boyer, 2001:98) Desde Tijuana y Mexicali, la organización orquestaba la transportación, importación, y distribución de cocaína, marihuana, metanfetaminas y heroína en grandes cantidades hacia los Estados Unidos. A mediados de los 90, la OAF creó un sistema de tarifas mediante el cual otras organizaciones delictivas de Chihuahua, Sinaloa, Colima, Tamaulipas, Nayarit, Michoacán y Oaxaca podían operar en la frontera de Baja California. De acuerdo a este reporte, la OAF cobraba el 60 por ciento del valor total de cargamentos de media tonelada o mayores a organizaciones que querían utilizar ese territorio para traficar drogas dentro de los Estados Unidos. Este sistema generó conflictos violentos ya que varias organizaciones como la de Ismael el “Mayo” Zambada se rehusaron a pagar esta tarifa. (Miró, 2003: 7).

De acuerdo al mismo documento, la esfera de influencia de esta organización se ha extendido hasta Colombia, Perú y algunos países de Centroamérica. También tienen conexiones con el crimen organizado de Rusia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En 2002, la OAF sufrió varias pérdidas importantes: en Febrero asesinaron a Ramón Arellano Félix, el más brutal de todos los hermanos. Ramón

Arellano Félix estaba en Mazatlán con dos de sus lugartenientes con el propósito de asesinar a Ismael el “Mayo” Zambada, líder del cártel de Sinaloa y rival de los Arellano Félix. Sin embargo, Ramón fue detenido por policías municipales y comenzó la balacera y la persecución que terminó en la muerte de Ramón y sus dos lugartenientes. En Marzo del mismo año, Benjamín Arellano Félix, hermano mayor y cerebro del cártel, fue arrestado en la ciudad de Puebla. Ese mismo año, el entonces Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, afirmó que en un período de 18 meses, cerca de 2000 integrantes de la OAF habían sido arrestados. Tal situación representó un duro golpe a la OAF la cual quedó bajo el mando de Francisco Javier Arellano Félix, alias “El Tigrillo”, sin embargo, éste fue capturado en Agosto de 2006 por agentes de la DEA, en mar territorial mexicano. Actualmente, la OAF está sumamente debilitada por sus fracturas internas (dividida entre lugartenientes de los Arellano Felix y los que siguen al Teo, o “Tres letras”) y por los constantes ataques de los cárteles rivales. Actualmente la ciudad de Tijuana es víctima de una ola de violencia sin precedentes, que responde al vacío de poder dejado por la ausencia de los hermanos Arellano Félix.

La Organización Carrillo-Fuentes (OCF), o Cártel de Juárez es, de acuerdo al documento emitido por el Congreso, la organización de narcotráfico más poderosa y geográficamente extensa en México y probablemente de Latinoamérica. Es una organización que ha invertido cantidades multimillonarias alrededor del mundo y sus rastros de dinero llegan hasta Liechtenstein, Argentina, Chile y Estados Unidos. A pesar de la muerte de su Amado Carrillo-Fuentes, alias “El señor de los cielos” en Julio de 1997, la OCF ha logrado expandir sus operaciones en México y Estados Unidos. La OCF emplea aproximadamente 3300 personas en unas 400 células distribuidas en 17 estados de la República mexicana. Mantiene un liderazgo de seis individuos y una red

de lavado de dinero encabezada por 26 gerentes regionales en todo México. (Miró, 2003: 8)

Vicente Carrillo Fuentes, hermano menor de Amado, lidera las operaciones del cartel en asociación con narcotraficantes regionales que eran leales al cartel antes de la muerte de Amado. Actualmente uno de ellos, Ismael Zambada García, alias El Mayo, ha expandido el territorio de la OCF a expensas de la OAF. EL Mayo también fue autor de la muerte de Ramón Arellano Félix en Febrero de 2002. De acuerdo al documento del Congreso de los Estados Unidos, la red de esta organización tiene células que se encargan del transporte y distribución de estupefacientes hacia ciudades tales como Los Angeles, Houston, Chicago y Nueva York. (Miró, 2003, 9).

La Organización Cárdenas Guillén, o el cártel del Golfo, tiene sus cuarteles en los estados de Tamaulipas y Nuevo León, pero tiene presencia en diez estados y representa aproximadamente el 15 por ciento de la cocaína traficada hacia los Estados Unidos. Uno de sus fundadores es Juan García Abrego, quien fue extraditado hacia los Estados Unidos en 1997. Durante el 2001, la OCG tuvo una fractura interna de la cual resultaron dos facciones, una dirigida por Osiel Cárdenas Guillén y otra liderada por Baudelio López Falcón, alias el Yeyo. La facción de Cárdenas Guillén basa sus operaciones en las ciudades de Matamoros, Reynosa y Ciudad Miguel Alemán, y ha intentado recientemente de derrocar a su rival el Yeyo. Esto ha producido una ola de violencia en Nuevo Laredo y Monterrey desde 2002. De acuerdo a un reporte confidencial de la Secretaría Nacional de Defensa, es probable que en realidad Guillén trabaje para Julio César Longoria Narváez, alias Ramiro Longoria, un prominente empresario de Tamaulipas, a quien ya se le ha vinculado anteriormente con tráfico de cocaína y corrupción a autoridades.

La Organización Guzmán-Palma (OGP) tiene sus bases en los estados de Sinaloa y Jalisco. Fue por muchos años mermada por la guerra con la poderosa Organización Arellano-Félix, pero desde la muerte y captura de los líderes de esta segunda organización, le ha permitido a la OGP recuperarse. Tiene presencia en 12 estados de la república mexicana. El actual líder del cártel, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera escapó de una prisión de máxima seguridad mexicana en enero de 2000, con la ayuda de guardias de la misma prisión. Guzmán se encontraba cumpliendo una sentencia de 40 años por tráfico de estupefacientes. A pesar de los esfuerzos de las administraciones de Fox y Calderón para recapturarlo, Guzmán sigue liderando el cártel de Sinaloa y es actualmente el narcotraficante más poderoso del país y probablemente del mundo. Otro líder del cártel, Hector Luis “el Güero” Palma Salazar, también intentó escapar de una prisión de máxima seguridad en Diciembre de 2002 pero no lo logró. Históricamente, esta organización ha tenido vínculos con la organización Carrillo-Fuentes.

La organización Zambada García, cuyo líder fue mencionado anteriormente, Ismael “El Mayo” Zambada García, ha operado por tres décadas con base en la ciudad de Mazatlán. Zambada es un granjero de casi 60 años con gran conocimiento acerca de cultivos y ha trabajado intensamente para incrementar su producción de heroína y para consolidarse como uno de los principales traficantes de cocaína colombiana. Durante los últimos años, Zambada ha intensificado sus esfuerzos por controlar las operaciones de la organización Arellano Felix en los estados de Sinaloa, Jalisco y Michoacán. Esto ha generado una violenta guerra entre aquellos leales a Francisco Javier Arellano Félix, Alias el Tigrillo, y aquellos leales a “El Mayo”. El asesinato del jefe de la policía de Tijuana Alfredo de la Torre en Febrero de 2000, entre otras muchas ejecuciones a funcionarios de esa misma entidad, es el resultado de esta guerra cruenta (Miró, 2003,10).

1.5 Nuevo Milenio: ¿Guerra Fallida? Algunos indicadores de la realidad mexicana.

El 19 de Septiembre de 2009, el Universal publicó un artículo en el que expone de manera acertada la geografía actual del narcotráfico en México de acuerdo a informes de la Agencia Antidrogas en Estados Unidos (DEA), el Reporte Nacional de la Droga 2009, informes del departamento de Justicia de los Estados Unidos e investigaciones en México, Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y Africa. De acuerdo a la información expuesta por el periódico actualmente los cárteles mexicanos han cambiado sus estructuras y se han consolidado más bien como empresas transnacionales, asegurando la continuidad de sus operaciones en el país y el resto del mundo. Cuentan con Directores Ejecutivos, cuadros operativos, equipos tecnológicos, ciclos de financiamiento y alianzas estratégicas con otras organizaciones. También se menciona que los cárteles de la droga cuentan con programas de expansión, actividades de reclutamiento, contraloría interna, áreas de impuestos, lavado de dinero, control de calidad, entre otros mecanismos propios de una gran corporación o empresa internacional. Lo anterior como resultado de la intensificación de las acciones del gobierno Mexicano para desarticular al crimen organizado. El artículo también menciona que actualmente los cárteles mexicanos controlan el 80 por ciento de cocaína que sale de Colombia y Sudamérica y el 90 por ciento de la cocaína que ingresa a Estados Unidos por territorio mexicano. Afirma que entre 2008 y 2009 los cárteles mexicanos dejaron de trabajar juntos a través de la alianza conocida como La Federación, lo que agudizó la violencia en el país. El cártel de Sinaloa se ha dividido en dos facciones, una dirigida por Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y otra por Ismael Mayo Zambada. Desde que a El Chapo se le encontró cáncer de próstata, es Nacho Coronel, uno de sus lugartenientes, quien se encarga de todas las operaciones de su facción. Por su parte, el cártel de los Beltrán Leyva se alió con el de los Hermanos

Flores, que operan desde los Estados Unidos. Vicente Carrillo Fuentes lidera el Cártel de Juárez y utiliza, al igual que todos los demás cárteles, sobornos, violencia e intimidación para operar de manera libre en ambos lados de la frontera. Todos los cárteles, incluyendo al de Tijuana y el del Golfo, utilizan alta tecnología y operan como grandes empresas transnacionales. Tras la aprehensión de Osiel Cárdenas Guillén, jefe del cártel del Golfo, la organización funciona ahora bajo el mando de tres personas: Ezequiel Cárdenas Guillén, Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, y Heriberto Lazcano, jefe de los Zetas, quienes actualmente operan ya como un cártel independiente. Todos estos se hacen llamar La Compañía (El Universal: 2009)

Los ataques del 11 de septiembre cimbraron a la nación más poderosa del mundo hasta sus cimientos y revivieron la noción de que la seguridad nacional puede estar afectada por lo que sucede en el exterior. Como consecuencia, las problemáticas relacionadas a la vecindad y la porosidad de la frontera se volvieron una preocupación fundamental para los Estados Unidos. Surgieron las doctrinas de guerra preventiva y de “homeland security”, en las que la prioridad es el combate al terrorismo fuera y dentro del país. También se creó el Departamento de Seguridad Interior, del Comando Norte y la Ley Patriótica, y en 2005 se firmó el Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. (Rodríguez, 2008: 2) En este contexto, el gobierno del expresidente Vicente Fox realizó algunos esfuerzos para contrarrestar el poder creciente del narcotráfico, Sin embargo, a pesar de algunas detenciones a narcotraficantes importantes, los esfuerzos mostraron estar sobrepasados por la dimensión del problema. A partir de 2006, el gobierno mexicano inició una guerra total en contra del narcotráfico, minando las redes de distribución y producción de los principales cárteles. En 2007 el gobierno mexicano gastó más de 2, 500 millones de dólares y utilizó a 12, 000 soldados en todo el país para tratar de contener la violencia ligada al narcotráfico. (INCB, 2009).

En marzo de ese mismo año, se suscribió un acuerdo bilateral entre los gobiernos de México y Estados Unidos en el que se establece un nuevo marco en materia de seguridad. Se le llamó primero “Plan México”, luego tomó forma concreta y se le catalogó como iniciativa Mérida. El objetivo de la Iniciativa Mérida es sanear las instituciones débiles, atrasadas o infiltradas por el narcotráfico y la corrupción, así como el fortalecimiento de algunos programas de la Procuraduría General de la República, como OASIS, un programa informático, y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Organizada (CENAPI). El presupuesto con el que se cuenta es de mil cuatrocientos millones de dólares, cantidad que está dividida en paquetes, que pueden llegar a sumar hasta quinientos millones de dólares en un año, aunque cabe señalar que dicha cifra es provisional y requiere la aprobación del Congreso estadounidense. (Benítez, 2008: 5) En esta iniciativa, Estados Unidos ha seguido insistiendo en entender al narcotráfico en términos de terrorismo. México por su parte, ha intentado enfocarse en el tema del narcotráfico y en la necesidad de compartir los costos asociados a la guerra contra el mismo. (Rodríguez, 2008: 5) Esta nueva estrategia es parte del cambio en el entorno internacional con respecto al concepto de seguridad.

Por su parte, en 2008 el ejército mexicano, apoyado por la Marina y la Policía Federal, tomó el control de las calles de las principales ciudades fronterizas del país, sustituyendo temporalmente a las policías locales en sus tareas de seguridad pública. Los operativos fueron un intento del gobierno de Calderón por detener la violencia en estas ciudades y retomar el control territorial vulnerado por las bandas del narcotráfico. 2008 fue el año más cruento en la historia de la lucha contra el narcotráfico en México, con un total de 6,756 ejecuciones vinculadas al crimen organizado, 880 de ellas en Tijuana (Martínez, 2009). Las causas principales de esta violencia resultaron ser, por

una parte, la creciente presión del gobierno mexicano en contra de los cárteles de las drogas por un lado, y por otro lado la disputa entre diferentes células de narcotraficantes por el control de las zonas de operación y las rutas de distribución.

Otro factor de preocupación es que durante los últimos años la demanda de drogas por parte de la sociedad Mexicana, que por muchas décadas fue mínima, se comienza a consolidar a partir del nuevo milenio como un mercado de gran importancia para los cárteles de la droga. Un ejemplo de esto es la ciudad de Tijuana que siempre ha estado ligada a la demanda de alcohol, drogas y servicios sexuales por parte del mercado al norte de la frontera, pero que actualmente cuenta con una creciente demanda interna de drogas psicotrópicas. Esto no es más que un reflejo de lo que sucede en todo el país, en parte porque cada vez hay una mayor capacidad de producción de drogas dentro del país, pero también porque cada vez es más difícil introducir drogas hacia Estados Unidos, especialmente después de la gradual militarización de su frontera con México como respuesta a los atentados del 11 de Septiembre. Una evidencia de ello es que a partir del 2007 los envíos de cocaína desde México disminuyeron sensiblemente, provocando un desabasto que llevó a que el precio por gramo de cocaína pura en Estados Unidos se disparara al doble (INCO, 2009).

Los cárteles mexicanos han asumido completamente el mando del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, y durante los últimos años se convirtieron también en productores de metanfetaminas. Esto produjo el crecimiento del consumo en el propio país, especialmente en la forma de *crystal*. En 2008, El Universal publicó una nota sobre un narcotraficante hasta entonces poco conocido. Se trataba de Ignacio Coronel Villareal, conocido como “Nacho Coronel”, o el “Rey de las drogas sintéticas” y considerado por el gobierno estadounidense como el capo más poderoso de México. Nacho Coronel comenzó su imperio trabajando para Amado Carrillo en Zacatecas,

luego se convirtió en el operador logístico del cártel de Juárez. El reporte afirma que tiene casas de seguridad en Jalisco y Yucatán pero su sitio predilecto se encuentra en un poblado en el estado de Durango llamado El Molino. A raíz de la fractura de la Federación, causado por el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, Nacho Coronel se quedó con el control de las operaciones en las antiguas rutas del cártel de Juárez. (Velediaz, 2008).

Nacho Coronel es tan sólo la “punta del iceberg” en el mercado de los sintéticos. De acuerdo con estimaciones de la DEA, los narcotraficantes en México controlan actualmente entre el 70% y el 90% de la producción y distribución de la metanfetamina que se consume en los Estados Unidos; los principales centros de producción están localizados en Baja California, Jalisco, Guerrero y Michoacán (Finckenauer, et. al. 2001). Solo en 2007, las autoridades mexicanas desmantelaron 26 laboratorios de metanfetaminas, de los cuales 9 fueron clasificados como “super laboratorios” (INCO, 2009).

De acuerdo un estudio realizado en 2008 hay tres aspectos fundamentales en relación con la tendencia al incremento del consumo de drogas en México: a) El consumo de marihuana, cocaína (sobre todo en forma de *crack*) y metanfetaminas se han incrementado considerablemente en los últimos años; b) la edad de inicio en el consumo ha disminuido sustancialmente, y c) ha disminuido la diferencia entre hombres y mujeres en el consumo de estas drogas (INCB, 2009). Como ejemplo podemos ver el caso de la ciudad fronteriza de Tijuana en donde el 14.7% de la población entre 12 y 65 años había consumido alguna droga ilegal, lo que es un porcentaje tres veces mayor que el nacional. En segundo lugar estaba Ciudad Juárez, con 9.2%, mientras que el porcentaje nacional fue de 5.3% (Brouwer, et. al. 2006).

A pesar de estos números impactantes, para los carteles de la droga en México, el mercado más importante sigue siendo el de Estados Unidos. Tan solo en 2007 se estima que un total de 35.7 millones de personas mayores de 12 años consumieron alguna droga ilícita en ese país, lo cual representa el 14.4% de la población en ese grupo de edad (INCB, 2009). Se estima que el mercado actual de las drogas oscila entre los 6 mil millones (Chabat, 2002) hasta los 25 mil millones de dólares anuales (González-Ruíz, 2001).

Otro problema aunado al crecimiento del consumo local de drogas, es la distribución al menudeo en las ciudades fronterizas de México que ha dejado de ser un negocio a pequeña escala. En la actualidad la distribución al menudeo en casi todas las ciudades fronterizas de lado mexicano está también en manos de redes controladas por los principales cárteles, a quienes hay que pagar protección. Los pilares de estas redes se encuentran en las bases del tejido social, en las colonias populares de la ciudad, protegidas por diferentes bandas y por las policías locales (Garduño, 2009). A pesar de que este fenómeno es bien conocido entre los expertos, existen actualmente pocos si no es que ningún estudio que profundice en temas como las dinámicas intrafamiliares relacionadas al narcomenudeo y que representa un punto clave para entender de una manera más integral al fenómeno del narcotráfico y cómo enfrentarlo.

El martes 22 de Septiembre aparece en El Universal una nota más sobre las ejecuciones relacionadas al crimen organizado que acontecen cotidianamente en todo el país. Con frialdad, la nota menciona que durante las últimas horas 13 personas perdieron la vida en el estado de Chihuahua, 5 en Sinaloa en diversos poblados y 4 más en Tijuana, mientras que el conteo total de ejecuciones para el año 2009 ya superan las 5,200 (El Universal: 2009). Estas noticias son cada vez más comunes y los medios y la gente comienzan a ver con ojos de normalidad, incluso ya con cierto desdén, la ola de

violencia que por más de una década ha asolado al país y que seguirá sucediendo si el gobierno no adopta una estrategia distinta a la que históricamente ha implementado. Los resultados para la sociedad y para el mismo gobierno no podrían ser peores.

2. Factores externos que han permitido la evolución del narcotráfico en México.

2.1 Políticas unilaterales y coercitivas de Estados Unidos.

Durante las últimas décadas, la relación entre México y Estados Unidos en el combate al crimen narcotráfico ha observado una sumisión total por parte de México a los dictados y estándares de acción del gobierno de los Estados Unidos. El problema de México es que nunca ha tenido una estrategia clara, Estados Unidos sí pero errada. Históricamente México sólo ha sabido reaccionar de manera intermitente ante las demandas de Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico. En suma, ambos países han sido constantemente inefectivos en sus políticas antinarcóticos desde la aparición del fenómeno y no han conseguido generar una estrategia integral y congruente para atacar el problema. Como resultado ahora vemos una mayor violencia en la sociedad, mayor corrupción en las instituciones y mayor consumo, producto de las políticas restrictivas de ambos países.

De acuerdo a Lindau, Estados Unidos ha patrocinado, por más de tres decenios, iniciativas para detener el flujo de drogas desde México. Ha facilitado el mejoramiento de servicios de inteligencia en México y ha presionado a este mismo país para que existan normas congruentes con la legislación estadounidense en materia de drogas (Lindau, 2000:252). En muchos sentidos, Estados Unidos ha brindado el apoyo a México para mejorar sus capacidades para combatir el narcotráfico. Desde la administración de Reagan el Congreso estadounidense aprobó excepciones a la ley que prohibía el Programa de Seguridad Pública, lo que permitió crear el Programa de Asistencia contra el Terrorismo en 1983, y el Programa Internacional para Adiestramiento y Asistencia en Investigaciones Criminales (ICITAP), en 1984 (Lindau, 2000: 252).

Entre 1984 y 1997, un grupo selecto del ejército mexicano participó en el Programa Internacional de Adiestramiento y Educación Militar (IMET) de Estados Unidos. También se creó la Fuerza de Respuesta de la Frontera Norte (FRFN), fundada en 1990 con 1800 miembros de la policía judicial federal mexicana (PJF), que utiliza 21 helicópteros UH-1H de Estados Unidos en operaciones antinarcóticos. Esta organización opera con el apoyo de los servicios de inteligencia del personal de ayuda táctica del ejército de Estados Unidos y de la DEA en la embajada. Actualmente “Estados Unidos recibe de satélites y otros dispositivos de reconocimiento como los AWACS (sistemas aéreos de supervisión y control), lo mismo que de informantes y de medios electrónicos (para interceptar comunicaciones telefónicas), los datos que comparte con autoridades mexicanas”. (Lindau, 2000: 253). En 1991 y 1992, México recibió de Estados Unidos 70 millones de dólares, incluida la transferencia de los helicópteros UH-1H.

También se ha intentado generar un código común para atacar a los cárteles con más eficacia. Si intentó hacer lo mismo mediante acuerdos bilaterales como el Tratado de Asistencia Legal Mutua (TALM) de 1989 y un Acuerdo para Intercambio de Información sobre Impuestos (TIEA). El TALM fue el primer acuerdo de su tipo en América Latina y permitía la cooperación incluso en asuntos donde no coincidían las leyes de ambos países, lo que facilita la confiscación de activos, entre otros procedimientos, sin que el secreto bancario que garantizan las leyes mexicanas impidiera las investigaciones de Estados Unidos. Adicionalmente, desde 1998 los bancos mexicanos han copiado los procedimientos estadounidenses para detectar dineros sospechosos. (Lindau, 2000: 253)

El esquema vigente del Programa Internacional del Control de Narcóticos de Estados Unidos no está pensado dentro de un marco de cooperación. Se basa en la fijación

autoritaria de las tareas que deben emprender varios países (entre ellos México) para reducir la oferta de narcóticos en Estados Unidos. También están estipuladas las sanciones para aquellos países que no sigan estas tareas. El proceso de Certificación creado en la década de los 80 es un ejemplo sumamente claro de esto. La certificación es en realidad un instrumento que carece de valor real en el combate al narcotráfico en el ámbito internacional. Durante la década de los 90 Estados Unidos identificó a 32 países que producen drogas ilícitas o que sirven de conducto a la distribución. 23 de esos países recibieron la certificación, Perú y Bolivia son dos de ellos. Lo interesante es que Perú sigue siendo el principal agricultor de la hoja de coca en el mundo, mientras que Bolivia sigue siendo uno de los principales productores de cocaína en el mundo (Roett, 1997: 2).

Igual de ridículo es el hecho de que México haya recibido la certificación en diversas ocasiones, no así Colombia, quien ha luchado con igual o mayor intensidad al narcotráfico durante las últimas décadas. La corrupción y la violencia existentes en México se observan diariamente. Pero Washington sigue certificando a México porque comparten intereses económicos y comerciales importantes, mientras que los costos de no certificar a Colombia son comparativamente pequeños. Adicionalmente, el gobierno de los Estados Unidos, en su proceso de certificación, se omite a sí mismo como un importante productor de marihuana y drogas sintéticas y como el principal consumidor de drogas del mundo. Mientras el Congreso de los Estados Unidos debate periódicamente el tema de la certificación o no a México, queda claro que en los intereses de Washington se mezclan otros temas altamente politizados como los relacionados al Tratado de Libre Comercio y al tema de la migración tanto legal como ilegal de origen mexicano en los Estados Unidos.

Para poder generar una estrategia bilateral efectiva es necesario que exista un marco de confianza y de comunicación constante y abierta entre los gobiernos de Estados Unidos y México. También tiene que existir una mayor disposición de Estados Unidos a participar en foros multilaterales con el objetivo de generar marcos de cooperación multilaterales que ataquen el problema a nivel internacional y no solo de manera regional. El caso de la Iniciativa Mérida es un proyecto interesante de cooperación bilateral en materia de lucha contra el narcotráfico. Si bien es comparable al Plan Colombia ya que supondrá una reforma y profesionalización en materia de seguridad

Desde la presidencia de Nixon, la política antidrogas de Estados Unidos y México ha tenido una naturaleza cíclica, determinada por encuentros y desencuentros entre los gobiernos de estos países. El escenario de consumo exacerbado de estupefacientes en Estados Unidos y el papel preeminente de México como proveedor ha marcado la relación bilateral. Como afirma Craig, entre mayor es la participación de México en este mercado, mayor es la presión de Washington, lo que su vez genera una mayor confrontación política entre México y Estados Unidos en torno al problema de las drogas. Cuando los indicadores de la participación mexicana es baja o no son alarmantes, las relaciones bilaterales tienden a ser mejores en general. El problema de esta relación cíclica es que es así porque en realidad la estrategia de Estados Unidos ha sido tomar decisiones de manera unilateral. Siempre que existe alguna crisis, como el caso Camarena, Washington olvida cualquier tipo de cooperación bilateral y asume la autoridad para generar políticas inmediatas que casi siempre son represivas o coercitivas. (Craig, 1989:266). En el caso Camarena, hubo una gran indignación por parte de la administración estadounidense por el secuestro y asesinato del agente de la DEA y del piloto mexicano. El mensaje de Washington era que el asesinato se pudo haber prevenido si los funcionarios mexicanos hubiesen prestado atención a las

advertencias e información provenientes de Estados Unidos en meses anteriores sobre la identidad y el modo de operar de los principales narcotraficantes mexicanos de aquel tiempo (Craig, 1989:267). Independientemente de que México hubiese hecho caso omiso o no a las advertencias de Estados Unidos, lo claro es que no actuó debidamente hasta que la presión era tal que se vio forzado a adoptar medidas inmediatas. Este esquema se ha repetido en diversas ocasiones durante las últimas décadas. Sería interesante saber si realmente los funcionarios mexicanos han sido tan descuidados como para cometer errores de tales magnitudes, o si más bien, había intereses particulares para no hacerlo.

Pensar que en las instituciones Mexicanas existe corrupción no sería nada nuevo, sin embargo se sabe muy poco de las redes de corrupción que existen dentro de las instituciones estadounidenses. En muchas ocasiones ha habido individuos que van desde funcionarios hasta jueces que han sido encarcelados o enjuiciados por haber caído presos de los narcodólares. Tampoco se sabe mucho de todas las redes de distribución y producción de drogas dentro de territorio Estadounidense, aunque sí existen y se distribuyen en las principales ciudades del país. En realidad, como Estados Unidos ve el problema como uno de seguridad nacional que proviene del exterior, se ha enfocado en reforzar las fronteras en un intento por detener la oferta de las drogas. Pero se niega a aceptar de manera abierta que por un lado, existe tal oferta por la gran demanda de su sociedad, y por el otro, que también hay producción y redes de la mafia de diversos países dentro de su propio territorio. Sin duda las decisiones del gobierno están influenciadas por su propia agenda política. Es decir, gana muchos más votos decir que el gobierno protege al país de la mala influencia proveniente del exterior y que se están gastando numerosos recursos para salvaguardar a la nación, que enfrentarse a la realidad de que su sociedad se está suicidando lentamente.

Probablemente la zona más afectada por el fenómeno del narcotráfico ha sido la frontera entre México y Estados Unidos que se extiende desde Tijuana hasta Matamoros. Dichas ciudades siempre han sido puntos de conflicto por la violencia que se genera debido a la rivalidad de los cárteles de la droga mexicanos por controlar las rutas de acceso hacia los Estados Unidos. Sin embargo, desde que el gobierno de Calderón declaró abiertamente la guerra contra el narcotráfico, la violencia ha aumentado hasta niveles nunca antes vistos. A pesar de la ridícula cantidad de dinero que el gobierno de Estados Unidos está invirtiendo en militarizar la frontera, ésta sigue siendo altamente permeable por la tecnología y la astucia de los narcotraficantes. No solo eso sino que en diversos puntos como Ciudad Juárez, la violencia y la inseguridad parecen estar fuera de control, han surgido en México diversas islas dentro del territorio nacional que parecieran estar en estado de guerra y anarquía total.

En realidad, la internacionalización de las leyes estadounidenses durante el siglo XX ha modificado los sistemas penales de muchos países. Ningún país ha intentado exportar su sistema de justicia penal como Estados Unidos, especialmente en los temas vinculados al crimen organizado. Pero entonces, ¿Por qué han sido tan negativos los resultados de la lucha contra el crimen organizado a pesar de todos los esfuerzos aquí descritos por los Estados Unidos?

Curiosamente, a pesar de la grandilocuencia que surge de la política antinarcóticos de Estados Unidos por sus dimensiones y la infraestructura que se ha implementado, los resultados han sido muy pobres porque en realidad no están atacando el problema de raíz. Pensar que el narcotráfico es un problema de seguridad nacional que proviene desde fuera de las fronteras de Estados Unidos es un gran error y muestra un gran cinismo o una gran inocencia por parte del gobierno. Desafortunadamente para México, la única solución real que puede poner fin a la guerra contra el narcotráfico se encuentra

en la sociedad estadounidense. La enorme demanda de drogas de Estados Unidos es la causa inicial tal problema. Según estimaciones del gobierno de Clinton, en el año 2000 existían alrededor de 2.7 millones de drogadictos habituales en Estados Unidos aunque algunos expertos hablan de hasta seis millones. Este mercado gigantesco es altamente atractivo para los narcotraficantes que encuentran formas cada vez más sofisticadas para seguir introduciendo la droga hacia Estados Unidos a pesar de los inmensos esfuerzos de los gobiernos.

2.2 Estados Unidos: una sociedad drogadicta.

Para Estados Unidos el problema de la drogadicción ya era serio desde hace varias décadas. Se estima que para finales de la década de los 80 la demanda en Estados Unidos por droga era de 110 mil millones de dólares anuales y existían aproximadamente entre 20 y 25 millones de fumadores de mariguana, 25 millones de personas habían probado la cocaína y 6 millones la consumían regularmente. También existían medio millón de heroinómanos. De acuerdo a Estas cifras ya eran alarmantes en esas décadas y todos los indicadores muestran que la tendencia general apunta hacia un aumento notable del consumo de estupefacientes (del Villar, 1986, 234). La reacción del gobierno de Estados Unidos ha sido totalmente errada por dos motivos. Por un lado ha tolerado el consumo y la producción interna con tal de evitar los costos de reprimirlos. Por otro lado, ha intentado encontrar la solución al problema en la represión externa, tratando el problema como uno de seguridad nacional que proviene desde fuera de sus fronteras. En suma, la estrategia de Estados Unidos no solo ha sido inefectiva sino contraproducente ya que se ha convertido para México en el factor que ha producido

mayor corrupción en las instituciones, especialmente en el aparato de seguridad del Estado.

El problema de la drogadicción es, en un inicio, una decisión individual que se vuelve colectiva. En Estados Unidos, esta decisión es cada vez más general y permea todos los estratos de la sociedad. Desde la década de los 60, la drogadicción se ha ido convirtiendo en un aspecto central de la cultura estadounidense. La pérdida de productividad laboral producida por la droga en 1983 fue aproximadamente de 60 mil millones de dólares (del Villar, 1986: 235). Lo interesante es lograr entender cuál es la motivación hedonista íntima que ha llevado a tantos estadounidenses a buscar un escape a la condición humana y a la realidad. Al final de cuentas, el abuso de cualquier droga es, en el fondo, un síntoma del debilitamiento de los valores tradicionales que la sociedad occidental ha sufrido durante las últimas décadas.

La sociedad en Estados Unidos es capaz de disfrutar de uno de los mejores niveles de vida en el mundo y sin embargo, también presenta índices inigualables de drogadicción. Pero eso es tema de una investigación mucho más profunda y excede los límites y alcances de este trabajo. El punto que hay que recuperar de este hecho es que si el gobierno de Estados Unidos no ha hecho nada para disminuir el consumo de droga es por los costos políticos que esto implicaría. La política de Estados Unidos en materia de droga se ha enfocado en la represión hacia el exterior pero no hacia su propia sociedad. Pensar en la cantidad de personas que consumen drogas y que estarían en contra de una política antinarcóticos es demasiado para un gobierno que, por lo menos en retórica, intenta proteger y exaltar el respeto hacia la libertad individual y los derechos humanos. Como afirma Samuel del Villar:

“En un sistema constitucional que garantiza la libertad del individuo para optar por lo que más le convenga mientras su opción no afecte los derechos de

terceros, al mismo tiempo fundamenta el Estado en el sufragio mayoritario de los ciudadanos, las posibilidades de la acción represiva se mantienen inherentemente limitadas cuando hay una opción colectiva cada vez mayor no sólo por el consumo de narcóticos, sino también por su producción. De aquí su tolerancia y la poca o ninguna efectividad de la represión a la oferta internacional, por el flujo de utilidades que otorga a los mayores intereses delincuenciales que tienden a fortalecerse cada vez más en lo financiero y lo político.” (del Villar, 1986: 244).

Es interesante observar cómo Estados Unidos no está dispuesto a hacer lo que sí hace en otros países, como las campañas de erradicación a las que están sujetos los campesinos y las múltiples comunidades rurales en México, Colombia, Bolivia, Turquía, etc. Comunidades y pueblos que sobreviven del cultivo de opiáceos y mariguana simplemente porque no hay más opciones de supervivencia, porque el narcotráfico ha sido capaz de ofrecerles las opciones que al gobierno no le ha interesado crear: empleo y un mejor nivel de vida.

No hay que ser un experto en economía para entender que la demanda ayuda a crear la oferta. Este es un principio ineludible que también aplica para el mercado de drogas. En otras palabras, es el exacerbado consumo de drogas por parte de la sociedad estadounidense lo que ha generado narcotraficantes en México y otras partes del mundo, que están dispuestos a correr altos riesgos por lo altamente rentable del negocio. Estados Unidos debe entender que para poder combatir de manera efectiva al narcotráfico, tiene que aceptar este principio y formular estrategias para reducir el consumo de drogas en casa.

La estrategia que ha seguido hasta la actualidad Estados Unidos, puede tener efectos positivos a corto plazo, ya que los precios aumentan y se restringe la oferta y la tolerancia del consumo, lo cual genera mayores ingresos para los narcotraficantes. Con

mayores ingresos, los narcotraficantes ahora pueden corromper a más autoridades y expandir sus redes de manera que en poco tiempo la cantidad de droga que cruza hacia los Estados Unidos es inclusive mayor que antes de las medidas restrictivas aplicadas por el gobierno estadounidense. En el siguiente momento del ciclo, los precios tienden a estabilizarse nuevamente y el consumo se abarata. En el mediano y largo plazo, lo que se ha visto es no solo un repunte de los niveles de tráfico de drogas, sino un constante aumento en las cantidades tanto de consumo de la sociedad estadounidense (recientemente también la mexicana) como de droga traficada hacia los Estados Unidos. Nuevamente el gobierno de Estados Unidos presiona para restringir la oferta externa y comienza otro ciclo de lo que Samuel del Villar llama “la narcotización de la sociedad y la consolidación de la narco delincuencia”. (del Villar, 1986: 239)

Si tomamos el ejemplo tan solo de la consolidación del mercado de la cocaína en Estados Unidos, podemos observar lo dañinas que pueden ser las políticas restrictivas. El repunte de la producción de México durante los años ochenta se debió al cambio de la ruta de acceso de la droga hacia los Estados Unidos. Como se sabe, la hoja de coca no puede producirse en los ecosistemas de México ya que es un cultivo típicamente andino. Los narcotraficantes sudamericanos resolvían su ruta de acceso por el Caribe y hacia Florida, específicamente Miami que se convirtió en pocos años en la capital distribuidora del polvo blanco (del Villar, 1986: 241). Sin embargo, la administración del presidente Reagan lanzó en 1982 la operación “South Florida”, encabezada por el entonces vicepresidente George Bush, con el fin de cortar el acceso a la producción andina por la ruta del Caribe. El resultado no fue la disminución de la cocaína sino una reubicación de las principales rutas de la cocaína. Esto permitió a los narcotraficantes mexicanos tener el control de las rutas de acceso hacia Estados Unidos, factor que les ha

dado un poder inigualable a nivel mundial ya que controlan el acceso al mercado de drogas más grande del mundo.

La estrategia, totalmente equivocada, de Estados Unidos siempre ha sido atacar la producción de droga, exigiendo y amenazando a los países productores. El problema es que ese nivel de producción sólo es posible con un nivel igualmente grande de demanda, por lo que intentar detener en las fronteras las miles de toneladas que entran al país cada año es una estrategia fútil y sumamente cara. En resumen, la política antinarcóticos de Estados Unidos ha fracasado tanto en atacar a la demanda (que hasta la fecha prácticamente no ha tocado), así como reprimir de manera efectiva la oferta. De acuerdo a Samuel del Villar, para finales de la década de los 80, sólo el 16% de la marihuana y el 10% de la cocaína y otras drogas peligrosas eran capturadas (del Villar, 1986: 242).

3. Factores Internos que han permitido la evolución del narcotráfico en México.

Para afrontar de manera más efectiva al narcotráfico, el gobierno mexicano debe proponerse además de las acciones que está realizando, una estrategia integral comprendiendo la complejidad del fenómeno. Existen múltiples factores domésticos que han permitido la evolución del narcotráfico, sin embargo, en este trabajo me enfoco en los que creo de mayor importancia.

3.1 Debilitamiento del Estado por su transición hacia la democracia y el reordenamiento de lealtades políticas.

La estrategia del presidente Felipe Calderón ha estado encaminada, desde un principio, al fortalecimiento de la soberanía del Estado. Esto en parte por la cerrada elección presidencial, que llevó al candidato Andrés Manuel López Obrador y a millones de sus seguidores a hablar de un fraude electoral, pero también porque el gobierno mexicano ha sufrido por décadas una paulatina deslegitimación hacia la sociedad y la comunidad internacional debido a continuas políticas económicas y sociales equivocadas, y constantes historias de corrupción, clientelismo y mentira. Vemos una transición de un régimen de partido único que fundamentaba su legitimidad a partir de su origen revolucionario, a un régimen multipartidista que se basa, por lo menos en principio, en el voto como la máxima expresión de soberanía popular. La creación de nuevas instituciones electorales especializadas y autónomas como el IFE y el TRIFE son ejemplo de este esfuerzo. (Morales Guzmán, 2009:2) Sin embargo, este proceso democratizador de las instituciones y de descentralización del poder, en realidad ha debilitado el mando federal y ha fragmentado las relaciones entre los grupos criminales y los funcionarios públicos (Morales Guzmán, 2009:1) El resultado ha sido el de

creación de “espacios” geográficos e institucionales en donde la autoridad del gobierno es prácticamente inexistente, el crimen organizado ha despojado del monopolio del poder al gobierno. Los casos más claros de este fenómeno en México son Chihuahua y Sinaloa. En estos “espacios” el gobierno no ha sido capaz de mantener la vigencia del Estado, la democracia, o la participación ciudadana, ni siquiera existe una garantía de seguridad hacia la población civil. Se han generado más bien, espacios en donde reina la impunidad y la violencia.

En el esfuerzo por sustituir el antiguo régimen y la creación de instituciones democráticas los gobernantes olvidaron crear aquellas relaciones democráticas que median entre las autoridades y los grupos sociales (Morales Guzmán, 2009:3). En nuevo esquema de mayor democracia, se han incorporado nuevas prácticas y nuevos actores políticos, lo que ha dificultado la relación entre el crimen organizado y el gobierno. El resultado ha sido la creación de un gobierno sumamente debilitado, deslegitimado que ofrece mayores oportunidades para el surgimiento de organizaciones criminales con gran capacidad corruptora.

Por otro lado, de acuerdo a Roderic Camp, México se encuentra en un doble proceso político. A nivel federal, el gobierno está sufriendo un cambio positivo hacia la democracia, con más instituciones y con un mejor sistema de “checks and balances”. Esto ha creado instituciones más independientes y con mayor capacidad de toma de decisión con respecto a la autoridad presidencial. A nivel local, este proceso democratizador ha permitido que germinen y prosperen gobiernos autoritarios a manera de cacicazgos. (Camp, 2007; 97) Gobiernos que ya no deben su lealtad al poder federal y que ahora, en un marco de mayor democratización, tienen mayor libertad para ejercer su poder con impunidad. En este contexto, y con una guerra declarada hacia el narcotráfico por el gobierno federal, el crimen organizado ha volteado a estos gobiernos

para pactar, corromper y cuando no es posible, aterrorizar por medio de la violencia con tal de que se les permita ejercer su negocio.

Desgraciadamente, en la actualidad no se cuenta con alguna base de datos que nos permitiese observar si existe alguna correlación entre corrupción a nivel local y crimen organizado. Sin embargo, me atrevería a suponer que sí la existe y que es precisamente esta nueva cepa de gobiernos locales autoritarios los que han permitido un crecimiento de los grupos criminales. Esto también ayudaría a explicar porqué han surgido tantos cárteles durante los últimos años. Si volteamos a la década de los 80, sólo existía uno: el cártel de Guadalajara, que prácticamente dominaba todo el territorio nacional, ahora existen más de una decena esparcidos por todo el territorio nacional y con múltiples guerras en un intento por controlar las principales rutas de la droga hacia los Estados Unidos.

3.2 Corrupción en las instituciones y falta de capacitación de los cuerpos policiacos y el ejército.

México tiene una responsabilidad primordial dentro de sus esfuerzos para combatir el narcotráfico, y está es enfrentar la corrupción que existe en todas las instituciones gubernamentales en todos los niveles pero principalmente en el aparato de seguridad del Estado, ya que es éste el que está librando de manera más frontal la guerra contra el crimen organizado. El gobierno también debe replantearse la campaña antinarcóticos que se ha venido desarrollando durante las últimas décadas, ya que como los datos indican, no han hecho mas que permitir que florezcan el consumo, la delincuencia organizada y la corrupción gubernamental, además se encuentra enfocada en el castigo

al eslabón más débil y que más protección debería tener: los campesinos mexicanos. (del Villar, 1986: 246).

Desde hace varias décadas, el ejército dejó de enfocarse en la erradicación de cultivos para perseguir a los cárteles de la droga. La PGR fue la principal encargada de esto por muchos años. Sin embargo, los altos niveles de corrupción dentro de los cuerpos policiacos municipales, estatales y federales y la falta de coordinación y capacitación de los mismos, los han convertido en blancos fáciles de corrupción y asesinatos. (Lindau, 2000: 253) Por este motivo el ejército ha tomado las calles de las ciudades más violentas del país, en un intento por retomar el control de los espacios públicos de los que se habían apoderado los narcotraficantes. Por este motivo, el gobierno ha aumentado el presupuesto destinado para el combate al narcotráfico en más del 60% durante los últimos años. (Lindau, 2000: 253) Presupuesto que va en detrimento de sectores como la educación, programas sociales, salud, etc. Para principios de la presente década, el ejército mexicano ya contaba con 130000 hombres, la armada con 37000 y la fuerza aérea con 8000, después de los levantamientos zapatistas y el recrudecimiento de la guerra entre los cárteles de la droga, el gobierno dedica más de 2246 millones de dólares anuales al ejército. (Lindau, 2000: 256).

Los operativos del gobierno de Calderón se han enfocado en combatir de manera frontal el problema del narcotráfico principalmente en los estados de Michoacán, Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, entre otros. Las instancias que han participado en los operativos han sido la secretaría de Defensa, de Marina, de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República. También se sumaron efectivos de la AFI y la PFP quienes participaron en la organización de células activas en 500 puntos del país, con la finalidad de disminuir el tráfico, producción y la distribución de enervantes. (Morales Guzmán, 2009: 8). La AFI desapareció hace algunos meses por problemas de

infiltración del narcotráfico y corrupción, la PFP no desapareció como tal, pero tuvo varias reformas internas por las mismas razones. El ejército no ha estado exento de estos problemas pero ha mostrado ser mucho más impermeable al poder corruptor del crimen organizado. Las agrupaciones policiacas, al estar más en contacto con los narcotraficantes, son más proclives a corromperse y es muy difícil controlarlas precisamente porque tienen menor cohesión institucional y están ligadas a la rama más corrupta del gobierno que es el poder judicial. (Lindau, 2000: 256)

3.3 Pobreza, Desempleo, falta de oportunidades y educación: a mayor pobreza en la sociedad, mayor riqueza para el narcotráfico.

La pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades no son problemas nuevos en México. Desde su misma fundación, han sido constantes en la vida de la población con menos recursos (que es la mayor parte). Las estrategias emprendidas por los distintos gobiernos desde mediados del siglo pasado han tenido resultados variables, pero no han logrado disminuir de manera importante estos problemas. Programas como “solidaridad” impulsado por la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, o incluso “oportunidades” impulsado por el actual gobierno, han logrado algunos avances importantes, pero por demás insuficientes para atender a los más de 40 millones de pobres que tiene el país.

El gobierno de Calderón y los que siguen deben comprender que sólo atacando la pobreza, el desempleo y la falta de educación es que se puede combatir al crimen organizado a largo plazo. Si bien es importante la estrategia que ha tomado hasta la fecha el gobierno, también es cierto que a largo plazo es una estrategia insostenible. La educación es simple aunque terrible. Mientras sigan existiendo altos índices de pobreza

en el país, falta de oportunidades y bajos niveles educativos, el crimen organizado tendrá potencialmente un mayor mercado.

Dentro de este mismo rubro, México tiene la responsabilidad de enfrentar el creciente mercado interno de consumo de drogas. Es interesante que las clases más bajas de la sociedad mexicana se drogan con sustancias que oficialmente no están tipificados como drogas, como en el caso del resistol 5000 también llamado “cemento”, y que el gobierno sólo esté enfocado en aquellas que consume más bien la clase media y alta de la sociedad, como la cocaína, la mariguana, etc. Sólo en el caso del crack y la heroína, que son drogas que se consumen también en los niveles bajos de la sociedad, el gobierno parece tener una postura definida.

3.4 Cultura: narcocultura y religión.

Un factor sumamente importante para comprender la magnitud del problema al que se enfrenta el gobierno y la sociedad mexicana es la cultura asociada al narcotráfico. Una cultura que se puede observar de diversas maneras en el campo y ciudades del país (principalmente en el norte) y que va asociada a la idea del éxito fuera de los marcos establecidos por la legalidad. Esta ruptura con el “establishment” genera permutaciones culturales, casi subculturas o contraculturas que se maravillan por las posibilidades que ofrece el narcotráfico.

La “narcocultura”, es la justificación de una serie de conductas de la sociedad relacionadas a la producción, distribución y venta de drogas. Pero no solo es eso, también implica un modo de vida, un modo de pensar y un modo de ver el mundo. Implica exaltar la grandiosidad y generosidad, el poder y la violencia. La narcocultura gusta de mostrar grandes mansiones con estatuas suntuosas, patios con fuentes y

jardines que evocan la grandeza del dueño. El poderío y lujo que se ha logrado fuera del marco de lo establecido, de lo que es legal y de aquellos preceptos de lo que tiene que hacer una persona para vivir bien. Vivimos en un mundo globalizado en el que lo establecido dice que sólo aquel mejor educado, con mejores redes sociales y dinero puede tener acceso a lujos, a casas grandes, coches excéntricos y hasta aviones privados.

El narcotráfico y la narcocultura han surgido como una opción para todos aquellos que no tiene la fortuna de pertenecer a esta élite. La opción de que, aunque seas pobre y sin educación, puedes llegar hasta la punta de la pirámide y tener todo aquello que de otra manera sería negado por el sistema en el que vivimos. No sólo eso, sino que tienes acceso a un poder casi ilimitado. El poder de tener tu propia organización altamente lucrativa, que además te da la capacidad de decidir sobre la vida de los demás. La narcocultura exagera la posibilidad de tener dinero y poder en un país que ha dejado poco espacio para los pobres y para aquellos que no tienen las posibilidades de llegar ahí de otra manera.

La falta de compromiso de los gobiernos mexicanos durante décadas, la esquizofrenia entre la retórica y las acciones del gobierno ha dejado por décadas a una población insatisfecha, que ve realidades cada vez más complejas y ajenas a las propuestas del gobierno, que ve en el narcotráfico todas las respuestas a los problemas que viven día a día. Cuántos campesinos en el campo y familias en las ciudades deciden trabajar para el narcotráfico porque no ven otras posibilidades, o por lo menos no otras que les permitan tener un nivel de vida digno. ¿O acaso es que los pobres por ser pobres no tienen derecho a lujos? Si hablamos de mafias, ¿cuántas mafias no existen en el gobierno, en las empresas multinacionales, en los mercados financieros? Mafias que nunca serán atacadas porque pertenecen a las élites del mundo.

En Sinaloa, Sonora, Baja California, Nuevo León, Michoacán, se observan en las calles y en la gente muestras claras de esta cultura. Las esclavas de oro con incrustaciones de diamante, las joyas excéntricas con imágenes de muerte o incluso las cachas de algunos gatilleros y narcotraficantes con incrustaciones de piedras preciosas, los coches blindados y las armas prohibidas o de uso exclusivo del ejército. En la narcocultura, el narcotraficante juega el papel que el gobierno dejó de jugar hace décadas en muchos lugares del país. Se convierte en la figura paternalista de las comunidades, es el proveedor de infraestructura, de dinero y comida para familias enteras, y por esto las comunidades les agradecen y los protegen del gobierno. Entre un gobierno manipulador, corrupto, mentiroso, que ha perdido todo tipo de legitimidad, y un narcotraficante que es violento y autoritario pero sincero en su actuar y su palabra, la gente prefiere al segundo. El dicho de “plata o plomo” es preferido a aquel que dice “el que no tranza no avanza”, o “un político pobre es un pobre político”.

La narcocultura impulsa la idea de que las cosas deben de ser claras y sencillas. Un narcotraficante es ilegal pero es derecho, vive fuera de la ley pero dentro de un conjunto de reglas: el que juega derecho vive, el que anda de soplón o traiciona se muere, puedes morir en cualquier momento pero vivir en la miseria es peor que morir. Estas reglas crueles pero claras son sumamente atractivas para jóvenes y personas que ven un gobierno que sólo ofrece incertidumbre y problemas.

Una clara expresión de la narcocultura son los narcocorridos que se hacen escuchar a todo volumen por las calles de ciudades como Mazatlán, Tijuana, Culiacán, etc. Son corridos que engrandecen a los narcotraficantes y su modo de vida. Personajes como Miguel Ángel Félix Gallardo alias “el padrino”, Amado Carrillo alias el “señor de los cielos”, Joaquín Guzmán Loera, alias “el Chapo”, entre otros, son los actores centrales de los narcocorridos. Sus historias son ejemplo a seguir para muchos jóvenes y niños

que ven una buena opción en el narcotráfico como un estilo de vida que busca vivir el momento y vivirlo bien.

Es verdad, muchos jóvenes pertenecientes a la clase media o incluso a las élites del país también entran a este negocio. El narcotráfico te ofrece dinero fácil, rápido, te ofrece poder. Poder para corromper, para comprar, para matar. Pensar que prohibiendo los narcocorridos se va a lograr algo, es un grave error. Los narcocorridos tan sólo son la expresión de una cultura que está sumamente enraizada en la sociedad, que forma parte de la base social y que está internalizada en muchas personas hasta niveles insospechados. Prohibir los narcocorridos sería negar la existencia de esta cultura. Para poder entender bien la magnitud del narcotráfico es necesario entender el porqué de estas subculturas.

Un elemento interesante de esta cultura es la muerte. Para los narcotraficantes la muerte está muy ligada a su trabajo porque en cualquier momento pueden matar o morir. La muerte es simplemente parte de sus vidas, psicológicamente tienen que estar preparados para enfrentarla. De ahí el culto a la “santa muerte”, una deidad que originalmente pertenecía sólo a narcotraficantes y gente que operaba fuera de la ley. Por dedicarse a actividades que les pueden conducir a la muerte en cualquier momento, el culto a la “santa muerte” les permite estar en armonía con la misma muerte. La muerte se convierte entonces en su aliado, en su compañera. Actualmente la “santa muerte” tiene millones de seguidores dentro de la religión católica. La pregunta es ¿por qué ha ganado tantos adeptos en los últimos años? Puede ser que al igual que la narcocultura, esta nueva expresión de religiosidad provea a la sociedad de respuestas antes no encontradas en los canales tradicionales del catolicismo. De cualquier manera, la narcocultura se nutre de esta figura de la “santa muerte” como alguien a quien pedirle favores, que te protege y que te va a ayudar en tiempos de crisis. La narcocultura es entonces un

conjunto de expresiones culturales que representan un paradigma alternativo, una cosmogonía que va más acorde a la realidad que vive la gente en México y en otros lados del mundo, tanto en el campo como en las ciudades. Ante la incompetencia de un Estado débil, corrupto e ineficiente, la narcocultura representa la necesidad de una “revancha social” que acumula cada vez más enojo, frustración y resentimiento contra el gobierno.

Conclusiones

El narcotráfico es una estructura de poder que funciona de manera alterna al Estado, pero no funciona como un poder que pudiese sustituirlo. Si bien el narcotráfico se ha convertido en una figura proveedora de comida, infraestructura, empleo en numerosas comunidades rurales, no intenta lo hace con fines políticos o persiguiendo algún tipo de ideología. El narcotráfico es un fenómeno que obedece puramente al mercado de demanda, y desde esa perspectiva representa una afrenta al Estado sólo cuando éste no le permite llevar a cabo las actividades de producción, trasiego, distribución y venta de su producto. Al narcotráfico, como a cualquier empresa, no le interesa enfrentarse al Estado pues le supone costos muy altos y prefiere un Estado fuerte que le provea la estabilidad suficiente para llevar a cabo sus actividades ilícitas.

La lucha contra el narcotráfico en la región México-Estados Unidos por parte de ambos gobiernos se puede ver históricamente como una serie de políticas restrictivas que permitieron la creación y evolución del crimen organizado al crear un mercado ilícito en la región. A partir de la presidencia de Reagan, estas políticas se han hecho cada vez más restrictivas generando mecanismos de coerción y castigo hacia países que no cumplan con los estándares de acción impuestos por Estados Unidos. Un ejemplo de esto ha sido el proceso de Certificación creado en la década de los 80, que lejos de ser benéfica ha generado conflicto de intereses y choques entre ambos países por su claro tinte unilateral y arbitrario. Han sido este tipo de políticas las que han permitido el fortalecimiento de los cárteles de la droga en México. Además la situación geopolítica inherente a México, le permite a estas organizaciones aprovechar el hecho de ser vecinos del mercado de consumidores de drogas más grande del mundo y tener ventajas competitivas con respecto a los cárteles colombianos. Esto, aunado a operaciones como

aquella para desvirtuar la “conexión francesa” o la llevada a cabo en Florida diseñada por los Estados Unidos para interceptar los cargamentos de droga provenientes de Sudamérica, y el cambio de ruta de la droga hacia México que se generó, permitió a los cárteles mexicanos tener la hegemonía total del mercado de drogas. A raíz de la guerra contra el narcotráfico que han librado los gobiernos mexicanos, los cárteles han tenido que modificar sus modos de operar y de organización así como la tecnología con la que trabajan. Esto ha generado cárteles a manera de corporaciones internacionales altamente eficientes, organizadas y tecnificadas.

Un fenómeno preocupante derivado de esta lucha antinarcóticos, es que a partir de la militarización de la frontera entre México y Estados Unidos por los ataques del 11 de septiembre, ha sido cada vez más difícil cruzar la droga hacia el vecino país del norte. Esto ha provocado que los cárteles mexicanos comiencen a vender la droga dentro del país, creando un mercado interno que va en aumento a ritmos alarmantes.

Estados Unidos no ha sabido reconocer el verdadero origen del problema, siendo el consumo de su propia sociedad la que le permite al narcotráfico mexicano continuar operando por ser tan redituable que cualquier riesgo es aceptable. La pregunta que Estados Unidos debería formularse es ¿qué está sucediendo dentro de su sociedad que consume tanta droga? Y ¿qué políticas debe tomar el gobierno para tratar a los adictos como a los consumidores potenciales, es decir, a la sociedad entera para que no caiga en el consumo? La estrategia que ha seguido Washington hasta ahora (enfocada en ver el problema del narcotráfico como uno que proviene de fuera de sus fronteras) claramente no ha funcionado. Es necesario que comience a replantear su concepto “seguridad nacional” y enfocarlo más hacia el concepto de “salud pública”.

Seguir con una política antinarcoóticos endurecida es insostenible para Estados Unidos en el largo plazo ya que significaría detención de campesinos de ambos lados de la frontera y fumadores de mariguana en las ciudades, incluso familias enteras que están vinculadas de alguna manera al narcotráfico. Esto implicaría tener más cárceles de las que ya existen y que se encuentran sobrecapadas. Los costos para el gobierno y la sociedad son enormes. La vía de la legalización como hizo el gobierno británico durante la década de los 80, cuando decidió controlar la heroína es una solución altamente improbable en un futuro próximo. (Craig, 1989:272) Por ende, la reducción de la demanda tiene que ser la prioridad en la política antinarcoóticos de Estados Unidos, así como la reducción de la oferta por vía policiaca y la erradicación. Adicionalmente, las autoridades tanto de México como de Estados Unidos deben de ser realistas en cuanto al reto que tienen enfrente y los resultados de sus acciones. Es altamente improbable que, como afirman algunos funcionarios, en Estados Unidos solo se cultiva el 10% de la mariguana que se consume en casa. En realidad, si se suman todas las estadísticas que aparecen en los boletines de prensa sobre las campañas de erradicación que se han llevado a cabo en México durante las últimas dos décadas, resulta que se han destruido en este país más mariguana y opio del que ha usado la humanidad entera en toda su historia. (Craig, 1989:272)

Los gobiernos de Estados Unidos y México deberían generar una política integral hacia los consumidores de sus propios países. Programas bien planificados con clínicas, manejadas por psiquiatras expertos, que pudiesen proveer a los adictos de la droga necesaria de manera gratuita, controlada y bajo prescripción. En otras palabras, Estados Unidos (y México) tiene que ver el problema del narcotráfico y el consumo de drogas dentro de su país como un problema de salud y no sólo como uno de seguridad nacional.

En realidad, un servicio como este, sería por mucho más barato para el gobierno, que los miles de millones de dólares que gasta para tener la infraestructura necesaria para interceptar la droga que pasa por la frontera. También se eliminarían los procedimientos persecutoriales que actualmente atestan los tribunales y las prisiones. Tanto México como Estados Unidos, deben atacar al narcotráfico desde sus finanzas y no sólo con incautaciones y programas de interdicción. Al final de cuentas, es el dinero de los narcotraficantes lo que les permite continuar produciendo y traficando sus productos y lo que les ha permitido expandirse a nuevos mercados e incluso corromper a funcionarios en los más altos niveles del gobierno.

En el caso de México es interesante observar que algunos de los factores más importantes que han permitido la evolución del narcotráfico son inherentes al sistema y a la historia política del país. En primer lugar, la histórica falta de legitimidad del gobierno y la debilidad del Estado ha permitido el crecimiento y fortalecimiento del crimen organizado con la ayuda de funcionarios corruptos. Dicha situación se ha agravado por el proceso inacabado de democratización que ha vivido el país durante las últimas décadas y que ha puesto en evidencia la debilidad del gobierno para imponer un estado de derecho y mantener el monopolio de la fuerza.

Otro factor decisivo que ha permitido la evolución del narcotráfico en México es la corrupción que existe en todas las instituciones del gobierno en todos los niveles. Desgraciadamente, mientras el narcotráfico tenga tanto poder económico y para intimidar, la corrupción seguirá siendo un problema sin solución. Además, es necesario capacitar y armar mejor tanto a los cuerpos policiacos como al ejército mexicano que se han visto rebasados por el poder de los cárteles. En un segundo plano, Calderón necesita comenzar a plantearse cómo retirará al ejército de las calles y cuál será la estrategia a seguir en ese momento. Continuar en la misma situación es insostenible tan sólo por los

costos que esto implica para el gobierno. Una vez retirado el ejército de las calles, el gobierno tendrá que enfocarse en atacar al narcotráfico desde otros flancos. Por un lado es necesario atacar el sistema financiero que cobija sus transacciones. Por otro, hay que comenzar a separar a los consumidores de los productores y entender que los adictos son enfermos, no criminales. La descriminalización del consumo de drogas es un paso fundamental para comenzar a ver el problema como uno de salud pública tanto en México como en Estados Unidos.

Otros factores particularmente importantes son la pobreza, la falta de oportunidades, desempleo, falta de educación y todas aquellas variables relacionadas al desarrollo humano. En un país en el que alrededor del 40 por ciento de la población vive en pobreza es sumamente cínico pensar que el ejército por sí solo puede acabar con el narcotráfico. Mientras existan cientos de comunidades que sólo pueden vivir de la siembra de amapola y mariguana porque el gobierno no les da infraestructura para otras cosas, es imposible que el narcotráfico desaparezca.

Existe una relación sumamente alta entre la tasa de desempleo y que la gente se dedique a actividades ilícitas, por lo que atacar el desempleo y la falta de oportunidades debería, al mismo tiempo, atacar al crimen organizado. La educación también es importante en este sentido. Una sociedad mejor educada es una sociedad con mayores oportunidades en el mercado laboral internacional, lo que les permite tener mayores expectativas de vida y considerar mucho más costosa una actividad como el narcotráfico.

Finalmente, el gobierno de Calderón y los que siguen deberán poner más atención al factor cultural que se encuentra detrás del narcotráfico. Si no se entiende el por qué de subculturas tan complejas como lo es el narcotráfico o la adoración a la “santa muerte” no entenderá el fenómeno en su totalidad y los gobiernos tanto de México como de

Estados Unidos caerán en el error de creer que el ejército por sí sólo puede acabar con el narcotráfico.

Tabla 1. Realidades y estrategias en el combate al narcotráfico

	México	Estados Unidos
Pasado	<p>Desde principios de siglo pero principalmente a partir de la segunda guerra mundial, México se convierte en uno de los principales productores de opiáceos y marihuana en el mundo, a petición de Estados Unidos.</p> <p>Cuando se prohíbe nuevamente, los productores se dan cuenta del gran mercado que existe en Estados Unidos y comienzan a traficar aunque a escalas moderadas.</p> <p>El gobierno no tenía ninguna estrategia definida en contra del narcotráfico y sólo respondía a las presiones de Estados Unidos o en momentos de crisis en la relación bilateral.</p>	<p>Comienza una serie de acciones internas, bilaterales e internacionales para prohibir el tráfico y producción de sustancias que consideraban perjudiciales para la salud y la sociedad.</p> <p>La sociedad norteamericana se convierte, a partir de la segunda mitad del siglo XX, en el mercado más grande de consumo de drogas en el mundo.</p> <p>La Estrategia de Estados Unidos se caracterizó por ser unilateral y coercitiva hacia otros países. Un buen ejemplo es el proceso de Certificación.</p>
Presente	<p>El narcotráfico en México ha ganado más poder que en cualquier otro país del mundo y en la historia del país. El gobierno ha perdido el control de diversas ciudades, incluso estados de la república en las cuales el narcotráfico disputa una guerra con el gobierno pero también entre los cárteles por el control de las principales rutas de la droga hacia Estados Unidos. El resultado ha sido un incremento en la violencia y la inseguridad para los ciudadanos.</p> <p>El mercado interno de consumo de drogas ha crecido de manera alarmante principalmente porque cada vez es más difícil cruzar la droga hacia los Estados Unidos a raíz de la militarización de la frontera.</p> <p>La Estrategia que persigue</p>	<p>La estrategia de Estados Unidos apenas comienza a dejar de ser unilateral, un caso interesante es la Iniciativa Mérida, en la que Washington por lo menos reconoce que el narcotráfico es un problema de ambos países.</p> <p>La estrategia de Estados Unidos sigue siendo equivocada porque no deja de enfocarse en detener el tráfico de drogas que proviene de fuera de sus fronteras, cuando la raíz del problema viene de su propia sociedad que representa el mercado de consumo de narcóticos más grande del mundo.</p> <p>El gobierno de Estados Unidos necesita dejar de pensar en el problema del narcotráfico sólo como uno de seguridad nacional ya que</p>

	<p>actualmente el gobierno de Calderón en el combate a las drogas presenta un balance negativo ya que ha sido sumamente costos para la sociedad y el gobierno mismo. Si bien es necesario que el monopolio del poder regrese a manos del gobierno, enviar al ejército a las calles debería ser tan sólo un paso en una estrategia integral y pensada más a largo plazo.</p>	<p>también es un problema de salud pública.</p>
--	---	---

La legalización o no de las drogas es un tema sumamente importante y necesario si se intenta tomar una estrategia integral que desarticule al narcotráfico, sin embargo es una discusión que claramente excede el objetivo de este trabajo. De momento sería pertinente mencionar, que una legalización por sí sola no ayuda en el combate al crimen organizado. El gobierno tendría que tomar el control sobre la producción, distribución y puntos de venta de las drogas para quitarle por completo el poder de mercado al crimen organizado, además de mantener controles estrictos de calidad que generara estándares altos en las expectativas de los consumidores. Esto evitaría que se crearan mercados ilegales más baratos pero de mala calidad.

